



**JUZGADO DE VILLENA;  
SENTENCIA N.º 39 DE 30 DE ABRIL 1983**

Francisco RUIZ MARCO



1.º—CONSIDERANDO: Que los hechos declarados probados no son constitutivos del delito que se acusa a F. F. M. de contra la seguridad del tráfico por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tipificado en el art. 340 bis a) 1.º del Código Penal produciendo en su consecuencia su libre absolución y ello por cuanto que los datos que configuran dicho delito son uno de carácter objetivo conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y otro subjetivo, el de colocarle en un estado psíquico incompatible para conducir con seguridad creando una situación de riesgo, pero sin que baste la presencia de uno solo de ellos para determinar la punibilidad de la conducta, criterio seguido por la más reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y en las Sentencias de las Audiencias Provinciales dictadas en grado de apelación; por todo lo que, si no consta la influencia alcohólica sobre la privación de la capacidad para conducir, procede la absolución, tal como sucede en el presente caso en el que la tasa de alcoholemia viene contradicha por la apreciación de normalidad en las constantes del individuo y el hecho de serle consentido por la fuerza actuante que continuara en la conducción del vehículo,

2.º—CONSIDERANDO: Que frente al criterio del Ministerio Fiscal de entender que la presencia del delito se produce por la existencia de una tasa de alcoholemia superior a 0'08 gramos por 100 cms. cúbicos determinante de la apelación sistemática de las resoluciones que lo contradigan, se trae en apoyo de esta resolución no sólo el criterio jurisprudencial recogido en la anterior consideración, sino también el estudio doctrinal del catedrático de Medicina legal Gisbert Calabuig de la Universidad de Valencia, en el que se establece que entre los valores de alcohol en sangre comprendidos entre 0'050 y 0'200 gramos por 100 la valoración jurídica de la alcoholemia debe ir acompañada de los correspondientes signos clínicos de la intoxicación que se extraerán de los datos testificales suministrados por las fuerzas actuantes relativos a su conducta general, apariencia externa, carácter de la palabra, forma de andar, etc.

---

Merece comentario la presente sentencia, además de por su correcto razonamiento jurídico y conclusión, por apartarse de la práctica habitual en los Juzgados de instrucción de nuestra provincia. Contrariamente a lo que se afirma en el tenor literal de la Sentencia, existe una lamentable ten-

dencia a subsumir automáticamente cualquier conducción bajo el efecto de una tasa de alcohol superior al 0'8 por mil, en el tipo diseñado por el art. 340 bis a; es decir, en la práctica forense conducir un vehículo bajo el efecto de bebidas alcohólicas parece ser, exactamente igual, a dar en un aparato mecánico una cifra por encima del 0'8 citado.

#### I. Aspectos sustantivos.

Frente a un criterio tan simplista, la sentencia comentada, valora el resto de los datos clínicos que obran en el atestado de la Guardia Civil y las demás pruebas aportadas en el proceso tales como constitución física del imputado, declaración del mismo, circunstancias personales, etc. En el primer considerando el juzgador distingue entre el elemento *objetivo del delito*, consistente en conducir con una tasa de impregnación alcohólica superior al límite reglamentario impuesto por el decreto 1980/1973 de 26 de Julio; y el *elemento subjetivo* consistente dice: «en colocarle en un estado psíquico incompatible para conducir con seguridad, creando una situación de riesgo,...». Tras hacer esa correcta distinción, y especificar que la presencia de que uno solo de los elementos no basta para determinar la punibilidad de la conducta, el juzgador llega a la conclusión de que el elemento subjetivo no se halla suficientemente probado. La anterior conclusión, clave de la sentencia, se fundamenta en consideraciones de tipo científico que sucintamente se señalan en el segundo considerando. Los datos, aportados por la defensa, y tenidos en cuenta por el juzgador de instancia, han sido extraídos del estudio de «Medicina Legal y Toxicología» realizado por el catedrático en dicha especialidad de la Facultad de Derecho de Valencia, Juan Antonio Gisbert Calabuig. En el citado estudio y bajo el apartado de valoración médico legal de la alcoholemia, aparece una interesante clasificación en la que se especifica los distintos estados físico-psíquicos en los que queda el sujeto tras haber ingerido determinadas cantidades de alcohol. El referido estudio concluye con la siguiente afirmación «el punto de polémica corresponde a los valores de alcohol en sangre comprendidos entre 0'50 y 2 gramos por mil». En efecto, para esas cifras todas las posibilidades entran en juego.... Por ello, cuando se dan esas cifras el resultado bioquímico debe completarse con el diagnóstico clínico. «Tal diagnóstico debe extraerse de los datos testificales suminis-

trados por las fuerzas actuantes relativos a la conducta general, apariencia externa, carácter, de la palabra, forma de andar, etc. que presente el sujeto. Op. cit. p. 121.

Aunque no haga al caso concreto, también conviene señalar que en el referido estudio se incluye una relación de alteraciones físicas (fiebres graves, efectos de temperaturas extremas, shock nervioso súbito, acidosis, etc. (Op. cit. p. 118) cuya presencia en el sujeto originaría que diera resultado positivo en la prueba del alcoholómetro. ello conduce a la necesidad de constatar el dato matemático con el resto de los datos y circunstancias que obren en la causa al objeto de evitar castigar como delincuentes a simples enfermos.

Junto a los datos clínicos, decíamos más arriba, que también deberán ser tomadas en cuenta las circunstancias personales del imputado. Pero ello de una manera esencial en el tipo de delito que nos ocupa. Así lo dispone el Consejo de Europa en su resolución B (73) de 26 de Abril de 1973, en cuya recomendación n.º 2 especifica «que la sanción deberá adaptarse a la situación personal del conductor y a todas las circunstancias del caso en particular»; no podía ser de otra manera dada, verbigracia, las distintas respuestas de los organismos físicos ante las mismas dosis de impregnación alcohólica, y dado también, aunque ello no sea suficientemente tenido en cuenta por la doctrina (Rodríguez Devesa) y jurisprudencial, que nos hallamos ante delitos en los que el bien jurídico protegido es la seguridad del tráfico, por lo que, habrán de valorarse cuestiones tales como la pericia contrastada del conductor, densidad del tráfico, etc., ya que todas ellas influyen en la determinación del riesgo generado y, por tanto, en la alteración desfavorable de las probabilidades normales de que se produzca la lesión del bien jurídico protegido (Muñoz Conde, *Derecho Penal*, parte especial, p. 390).

Como conclusión, la sentencia realiza una correcta interpretación y aplicación del tipo diseñado en el art. 340 bis a) del Código Penal, al considerar que debe quedar probada la influencia en el conductor de la tasa de alcoholemia, que tal convicción debe fundarse en todas las *pruebas practicadas* y en todos los datos disponibles (cumpliendo así el mandato contenido en el art. 741 de la LECRIM) y que, en definitiva, el mero hecho de superar un índice matemático no supone automáticamente incurrir en el delito previsto del Código Penal.

## II. Aspectos procesales.

El proceso que ha culminado con la sentencia absolutoria comentada, ha discurrido por los trámites regulados en el llamado procedimiento del «Juez del Mazo». Ni la ley 10/1980 ni tampoco las diligencias preparatorias, parecen ser el procedimiento más adecuado para la tramitación de delitos de esta naturaleza y entidad. En el primer caso la falta de garantías y en el segundo la extremada lentitud, son dos aspectos, entre otros, que hacen desaconsejable la utilización de tales procedimientos. Todo ello apunta a la necesidad de crear un procedimiento penal monitorio, similar a los existentes en Francia («procedure simplifiée») o en Italia («Procedimiento per decreto»); el procedimiento, previsto únicamente para la imposición de sanciones no privativas de libertad, se caracterizaría por una rápida y operativa primera fase, en la que a la vista del atestado policial, el juez impondría una sanción. Notificada al imputado, este puede conformarse, guardar silencio u oponerse a su ejecución. En los dos primeros casos, la sanción adquiere firmeza y tan sólo en el caso de que el imputado se oponga a la ejecución, se abre a la vía de un moderno procedimiento contencioso, ante el Juez del distrito.

Con ello se evitarían un gran número de procedimientos ya que en casos claros, de embriaguez evidente, el imputado se allanaría a la sanción y, tan sólo, en aquéllas ocasiones en que el sancionado o su abogado, tuvieran la firme convicción de inocencia, se accionaría un procedimiento penal con todas las garantías.